EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SENTENCIA DEFINITIVA

Chihuahua, Chihuahua, diez de octubre dos mil veintitrés.

Sentencia que resuelve en definitiva el procedimiento de responsabilidad administrativa número **2023/OIC/PRA032**, instruido en contra del ciudadano **Guillermo Antonio Cabello Rivas.**

GLOSARIO

Código	Código de Ética y Conducta de las personas Servidoras Públicas del Municipio de Chihuahua
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ley General	Ley General de Responsabilidades Administrativas
IPRA	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
OIC	Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua
PRA	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

Además, las fechas citadas a lo largo de la presente resolución se entenderá que hacen referencia al año dos mil veintitrés salvo que expresamente se indique la anualidad a la que corresponden.

ANTECEDENTES

1.1. Denuncia. Con fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad investigadora del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua recibió escrito de denuncia suscrito por el C. Carlos Emanuel Grijalva Acosta**,** relativa a hechos posiblemente constitutivos de responsabilidad administrativa atribuibles al Ciudadano **Guillermo Antonio Cabello Rivas.**

1.2. Radicación. El veinte de septiembre de dos mil veintidós se dictó acuerdo de radicación por parte del titular del área investigadora del *OIC*, a través del cual se ordenó iniciar con la investigación correspondiente bajo el número **2022/OIC/DE068.**

1.3. Calificación de conducta. El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la autoridad investigadora consideró que el expediente se encontraba debidamente integrado y que no existían actos o diligencias pendientes por desahogar, por lo que calificó la falta administrativa como no grave.

1.4. IPRA. El veinte de junio de dos mil veintitrés, la Autoridad Investigadora elaboró IPRA, el cual se recibió en esta Área de Responsabilidades el veintiuno de junio de dos mediante oficio número **OIC/AI/0690/2023**, signado por el Titular del Área Investigadora del *OIC*, al que acompañó el expediente de investigación número **2022/OIC/DE068**, integrado por ciento setenta y dos fojas.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

1.5. Admisión. El veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se radicó el *IPRA*, registrándose el expediente ante esta Área de Responsabilidades con el número **2023/OIC/PRA032,** mientras que el día veintiséis de junio se dictó Acuerdo de admisión en el que se ordenó emplazar al presunto responsable.

1.6. Medidas cautelares. Al presentar su *IPRA*, la autoridad investigadora no estimo necesaria la solicitud de medidas cautelares.

1.7. Emplazamiento. El día diecisiete de julio, mediante cédula de notificación por instructivo se emplazó al Ciudadano **Guillermo Antonio Cabello Rivas** al procedimiento de responsabilidad administrativa, diligencias en las cuales les fue entregada copia certificada constante de ciento catorce fojas útiles, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 193, fracción I de la *Ley General*.

1.8. Audiencia inicial. La audiencia inicial fue celebrada en las instalaciones del *OIC* a las once horas del día dos de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se tuvo a las partes asistentes realizando las manifestaciones que consideraron pertinentes y por autorizado como defensor del presunto responsable al Licenciado Erick Barraza García, en términos amplios que señala el artículo 117 de la *Ley General*.

1.9. Admisión y desahogo de pruebas. Por acuerdo del quince de agosto de dos mil veintitrés se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad investigadora y la defensa del presunto responsable, así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208, fracción IX de la *Ley General* se declaró abierto el periodo de alegatos, concediendo un plazo de cinco días hábiles comunes para las partes, atendiendo a que no existían diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

1.10. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés se tuvo por prelucido el derecho de las partes a formular alegatos, decretándose el cierre de la instrucción y se turnó el expediente para la elaboración de resolución, la cual se emite con base en las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Esta Área de Responsabilidades, es competente para conocer y resolver el presente PRA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, primer párrafo, 16, primer párrafo, 109, fracción III, párrafos primero, segundo y sexto de *la Constitución Federal*; 178, fracción III, párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, 3, fracción IV y XV, 9, fracción II, 10, párrafo segundo, 111, 202 fracción V, 203, 205, 207 y 208, fracción X de la *Ley General*; artículos 28, fracción X, 100, fracción XXXIII, 101, fracción III, y 101, bis fracción III, numerales 1, y 4 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, así como por lo previsto en el artículo 44 de los Lineamientos que Regulan el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, toda vez que el mismo versa sobre una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDA.- PROCEDENCIA

Ahora bien, previo a continuar con el estudio del expediente al rubro indicado, de conformidad con el artículo 9, último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa de aplicación supletoria al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 118 de la *Ley General*, se analizarán las causales de improcedencia y sobreseimiento del Procedimiento de Responsabilidad

Administrativa, ya que al ser una cuestión de orden público e interés social, su estudio es preferente.

Bajo este contexto, una vez realizado el estudio de los autos que integran el expediente en que se actúa, se desprende que no se actualiza ninguna de las causales previstas en los artículos 196 y 197 de la *Ley General*, por lo que se procederá al estudio de fondo en el presente asunto.

CUARTA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO

En este apartado se verificará que el derecho al debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento hayan sido debidamente garantizadas en el PRA en estudio, bajo la óptica del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro **"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO"**, expone claramente los elementos que integran el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", los que deben respetarse a fin de cumplir con la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión de las partes:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

3) La oportunidad de alegar; y

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, que es evitar la indefensión del afectado.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

Ahora bien, si la primera formalidad esencial de todo procedimiento es que la parte afectada sea llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente; el ser llamado no solamente comprende la posibilidad de que el particular sea emplazado de que existe un procedimiento que pudiera culminar con la emisión de un acto privativo, sino que — de forma más amplia — exige poner a su disposición todos los elementos que le permitan tener una noticia completa del hecho que se le imputa.

Entonces, la finalidad de ser emplazado estriba precisamente en la oportunidad de ofrecer pruebas y de que éstas sean desahogadas. De igual modo, las partes deben tener el derecho de ofrecer alegatos y de que estos sean tomados en cuenta por la instancia resolutora, para que ésta, finalmente, dicte una resolución en la que dirima las cuestiones planteadas.

Atendiendo a lo anterior, y respecto a lo establecido por los artículos 7, fracción VII, en relación con el 111 de la *Ley General*, al ser deber de esta autoridad proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Norma Fundamental, especialmente el debido proceso para las partes, corresponde a esta instancia llevar a cabo el análisis integral de la tramitación del *PRA*, para primeramente, verificar que la substanciación del procedimiento se haya realizado conforme a las formas y tiempos previstos en la *Ley General*.

Bajo este contexto, de las constancias se advierte que el señalado como presunto responsable fue debidamente emplazado, ya que la autoridad substanciadora practicó la diligencia de emplazamiento el día nueve de marzo en el domicilio ordenado en el acuerdo de admisión dictado el siete de marzo.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

Además, según consta en la cédula de notificación personal practicada, al llamarse al *PRA* al presunto responsable, en la diligencia de emplazamiento se puso a su disposición copia certificada del expediente de investigación y sus anexos, el *IPRA*, las pruebas aportadas en el mismo, así como el acuerdo de admisión dictado por la autoridad substanciadora, documentos a través de los cuales se le hizo de conocimiento de manera detallada y precisa los hechos imputados y, además, se le hizo saber el derecho que le asiste de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con uno, le sería nombrado de oficio. Luego, con la anticipación prevista en el artículo 208, fracción IV se citó a las demás partes, para que concurrieran a la audiencia inicial.

Por su parte, el servidor público señalado como presunto responsable, en dicho acto nombró a su abogado defensor, y lo autorizó en los términos amplios del artículo 117 de la Ley General, señalando domicilio para que su defensor recibiera notificaciones en su nombre, se le dio oportunidad de realizar las manifestaciones que estimara necesarias para su defensa, así como de ofrecer pruebas.

Las pruebas que obran en el expediente fueron admitidas por acuerdo del quince de agosto, el cual fue debidamente notificado a las partes.

Luego, una vez desahogadas todas las pruebas ofrecidas, y al no existir diligencias pendientes para mejor proveer, se declaró abierto el periodo de alegatos, actos que se notificaron debidamente a las partes, aun y cuando estos no están señalados expresamente en el catálogo de notificaciones personales contenido en el artículo 193 de la *Ley General*.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

El veinticinco de agosto se dictó acuerdo en el que se tuvo por precluido el derecho de las partes para formular alegatos, decretándose el cierre de la instrucción y se turnaron los autos para dictar resolución, mismo que se notificó personalmente a las partes.

Bajo este contexto, se advierte que las formalidades esenciales del procedimiento fueron debidamente garantizadas en el PRA en estudio y, además, se aplicaron las adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar que el desempeño procesal de la tercera interesada agraviada; sin que ello implicara conceder ventajas injustificadas o indebidas que generaran un desequilibrio procesal para el presunto responsable, sino justamente garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

QUINTA. - CASO CONCRETO

I. Falta que se Imputa

Del IPRA, se advierte que la falta que se imputa al Ciudadano **Guillermo Antonio Cabello Rivas** es la prevista en el artículo 50 de la Ley General al señalar que con los hechos atribuidos se causó un daño al ente público con motivo de su actuar negligente.

> *Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.*

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

II. Hechos Atribuidos

La autoridad investigadora expone en su IPRA, que Ciudadano **Guillermo Antonio Cabello Rivas,** en ejercicio de sus funciones como auxiliar especializado del Departamento de Análisis de Legislación de la Subdirección Jurídica de y Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, presuntamente incurrió en la falta administrativa no grave, prevista en el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo anterior, en razón de los siguientes hechos:

> *"…El día primero de septiembre del dos mil veintidós, a las cuatro horas con treinta dos minutos, el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, auxiliar especializado del Departamento de Análisis de Legislación de la Subdirección Jurídica de y Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, al conducir el vehículo tipo pick up RAM 700 con placas DX-7237A propiedad del Municipio, negligentemente impactó contra la pluma de acceso de la caseta ubicada en la cerrada Puente de París en el Fraccionamiento Puente de Piedra en esta ciudad de Chihuahua.*
>
> *En consecuencia, el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, de manera negligente ocasionó daños al patrimonio del Municipio de Chihuahua, y a la infraestructura del fraccionamiento en mención. …"*

III. Marco conceptual y jurídico

El ejercicio del servicio público atiende a los fines del estado, siendo la vía para su materialización, los servidores públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, toda vez que éste no solo está obligado a entregar bienes y servicios a la colectividad, debe hacerlo procurando que este sea en las mejores

condiciones, en términos del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Destaca por su importancia el principio de legalidad, el cual constriñe al servidor público a actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, obligando al servidor Público a conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Asimismo, la conducta que se le imputa al presunto responsable dentro de sus elementos típicos contempla varios elementos normativos, los cuales se conceptualizan a continuación:

Daño. El artículo 1991 del Código Civil del Estado de Chihuahua, establece que: "*…se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación…*"

Perjuicio. Acorde al artículo 1992 del Código Civil del Estado de Chihuahua: "*…Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación…*"

Negligencia. El diccionario de la lengua española de la real academia española lo define de la siguiente manera:

"…Del latín neglĭgens, -entis, part. pres. act. de negligĕre 'descuidar'.
1. adj. descuidado. U. t. c. s.
2. adj. Falto de aplicación. U. t. c. s…"

Patrimonio. El diccionario de la lengua española de la real academia española lo define de la siguiente manera:

"…Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afect os a un fin, susceptibles de estimación económica…"

Ente público. Según el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para efectos de esta se entenderá como tal a: *"…los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas,* ***los municipios*** *y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno…"*

SEXTA.- CAUDAL PROBATORIO

Precisado lo anterior, para estar en aptitud de realizar un estudio de fondo, lo procedente es determinar si con las constancias que integran el expediente, es posible tener por acreditada la existencia de la falta que se imputa y la responsabilidad del Ciudadano **Guillermo Antonio Cabello Rivas.**

En ese sentido, de manera previa se procederá a enunciar los medios de prueba ofrecidos por las partes, para luego valorarlos.

I. Pruebas de la autoridad investigadora.

En el expediente fueron admitidas y desahogadas las siguientes pruebas ofrecidas por la autoridad Investigadora:

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

1. La documental pública, consistente copia certificada del Formato Único para Trámite, de Personal, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se establece q alta del C. Guillermo Antonio Cabello Rivas a partir del dieciocho de agosto del dos mil veintidós, como Auxiliar Especializado adscrito al Departamento de Análisis de Legislación de la Subdirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua.

2. La documental pública, consistente denuncia original de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual el C. Carlos Emmanuel Grijalva Acosta remitió evidencia fotográfica y diversas videograbaciones.

3. La documental pública, consistente en acta circunstanciada de fecha cinco de octubre del dos mil veintidós, en la cual se hizo constar diversa evidencia fotográfica.

4. La documental pública, consistente oficio original número SG/1353/2022, recibido eN fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintidós, signado por el Subdirector 4 Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua (Foja 26), mediante la cual se acredita la posesión por el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, de la camioneta tip0 pick up Ram 700 con placas DX-7237-A, en la fecha del siniestro, al haberse señalado en el mismo que el vehículo antes mencionado se encontraba siendo utilizado por el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas.

5. La documental pública, consistente en acta circunstanciada de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés en la que el C. José Ricardo Orrantia Mendias, en su calidad de personal especializado adscrito a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua se presentó ante la autoridad investigadora a rendir sus manifestaciones

en relación al daño ocasionado al vehículo oficial camioneta tipo pick up Ram 700 blanca con placas DX-7237-A.

6. La documental pública, consistente en acta circunstanciada de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la que el C. Luis Carlos Acosta Corral, en su calidad de personal especializado adscrito a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, se presentó ante la Autoridad Investigadora a rendir sus manifestaciones en relación a la reparación del daño ocasionado a los particulares y patrimonio del Municipio de Chihuahua el multicitado siniestro.

7. La documental pública, consistente en copia certificada de la denuncia con número de caso 19-2022-0020469, interpuesta por la persona apoderada legal del Municipio de Chihuahua, ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

8. La documental pública, consistente en copia certificada de la Entrega de Reparación del Daño a la Víctima de fecha dos de marzo del dos mil veintitrés, signado por y Representante Legal del Municipio de Chihuahua y la Agente de Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

9. La documental pública, consistente Presupuesto por parte de la empresa SERVICIO MAELY enderezado y pintura, en atención al Municipio de Chihuahua, en el que se hace referencia a las refacciones y mano de obra requerida para la reparación del vehículo oficial del Municipio marca DODGE RAM-700 modelo 2019.

10. La documental pública, consistente en acta circunstanciada / entrevista de fecha cinco de abril de dos mil veintitrés, en el que el C. Carlos Emmanuel Grijalva Acosta, en su calidad de presidente del comité de vecinos del fraccionamiento

Puente de Paris, manifestó ante la Autoridad Investigadora que el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas no es residente del fraccionamiento mencionado.

11.La documental pública, consistente en acta circunstanciada de fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la que el C. Luis Iván González Delgado, en su calidad de inspector de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, manifestó ante la Autoridad Investigadora en relación a las funciones propias de un inspector de la Subdirección de Gobernación y a la asignación de la camioneta tipo pick up Ram 700 con placas DX-7237-A en fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintidós.

12. La documental pública, consistente oficio original número SRIA/0431/2023, recibido en fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua.

13. La documental pública, consistente en oficio original número OM/SRH/0598, recibido en fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, signado por el Subdirector de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua.

II. Manifestaciones del presunto responsable

En la audiencia inicial celebrada en las instalaciones del *OIC* el día dos de agosto de dos mil veintitrés le concedió el uso de la voz al Licenciado Erick Barraza García, quien manifiesto:

> *"...con motivo de los hechos que se investigan en la presente carpeta queremos invocar desde este momento como atenuantes de responsabilidad las causales previstas en el artículo 76 en sus distintas fracciones de la Ley*

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

General de Responsabilidades Administrativas, lo anterior ya que en atención a la fracción I y de las constancias que integran el expediente se puede advertir el nivel jerárquico en el que se encuentra mi representado como auxiliar especializado adscrito al departamento de análisis de legislación, sin embargo, realiza funciones como inspector de gobernación adscrito a la subdirección correspondiente. Aunado a ello, se invoca la antigüedad en el servicio toda vez que el alta de mi representado fue a partir del 18 de agosto de dos mil veintidós y el accidente sucedió quince días después, el primero de septiembre del mismo año, acreditándose con ello la falta de costumbre, o experticia de desempeñar sus funciones a altas horas de la madrugada por lo que en la fracción II del numeral al que ya hice referencia podemos advertir las condiciones exteriores y medios de ejecución en el sentido de que en las constancias se advierte que mi representado era estudiante de derecho, cumplía con un horario laboral de oficina y aparte cumplía funciones de campo de inspección durante la madrugada, es decir, no estaba acostumbrado a manejar en cansancio durante dicha jomada laboral, por lo cual se quiere hacer notar respecto a la fracción III de que es la primera vez que mi representado se ve involucrado en un procedimiento administrativo de esta índole. Por último, quisiéramos adherirnos, en caso de que la argumentación anterior no sea suficiente para liberar a mi representado de cualquier responsabilidad, a los beneficios que otorga el artículo 101 fracción II de la ley general de responsabilidades administrativas por la razón de que el acto u omisión fue subsanado de manera espontánea previo a la notificación y celebración de la presente audiencia, ya que obra constancia que ante el agente del ministerio público se repararon los daños objeto de la presente investigación, por lo que de manera respetuosa solicitamos a esta autoridad resolutora se abstenga de imponer alguna sanción administrativa. Para tales efectos, como medio probatorio se ofrece la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en ambos efectos, en todo lo que beneficie a mi representado…"

III. Valoración probatoria

La *Ley General* establece en su artículo 130 que para conocer la verdad de los hechos la autoridad resolutora podrá valerse de cualquier persona o documento, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente y con pleno respeto a los derechos humanos, estando únicamente excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones.

Esa misma normativa señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, mientras que los artículos 133, 134 y 165 de la *Ley General* disponen las reglas para la valoración de la prueba.

Por su parte, el artículo 138 y 141 de la *Ley General* dispone que no serán objeto de prueba: el derecho y los hechos notorios, pudiendo la autoridad que resuelva referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado.

Sobre esas premisas, se procede a valorar las pruebas y diligencias que obran en el expediente, en los términos siguientes:

Las documentales públicas ofrecidas por la autoridad investigadora, identificadas en el apartado I, numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de esta consideración, se les reconoce valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad y en cuanto a la veracidad de los hechos que en ellas se refieren al haber sido emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones y no ser objetadas o controvertidas por otra prueba con el mismo valor, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 131 y 133 de la *Ley General*.

Lo anterior, sin dejar de considerar que los medios de prueba y su valoración deben generar como resultado un estándar de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en favor de los presuntos responsables de faltas administrativas, contemplada en el artículo 135 de la *Ley General*.

En cuanto a la veracidad de los hechos que con dichas pruebas se pretenden acreditar por parte del presunto responsable, a éstos se les concede el valor de indicio ya que en las mismas puede derivarse un argumento probatorio y comprobar la existencia de las circunstancias relativas a los hechos que se pretenden probar, en razón del nexo lógico y natural que existe entre ambos.

Con base en el método de valoración de pruebas expuesto, esta Autoridad resolutora dejará a salvo los principios que rigen los procedimientos de responsabilidad administrativa, es decir, de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

SÉPTIMA.- ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS

Al C. Guillermo Antonio Cabello Rivas se les atribuye en el IPRA que, en ejercicio de sus funciones como como Auxiliar Especializado adscrito al Departamento de Análisis de Legislación de la Subdirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, de manera negligente ocasionó daños al patrimonio del Municipio de Chihuahua y a la infraestructura del fraccionamiento en mención.

A este respecto, se cuenta con la denuncia original de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual el C. Carlos Emmanuel Grijalva Acosta remitió evidencia fotográfica y diversas videograbaciones, en relación con el acta

circunstanciada de fecha cinco de octubre del dos mil veintidós, de la cual se desprende la copia certificada de un disco magnético de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, suscrita por el C. Fernando Alonso López Castillo, Titular del Área Investigadora del *OIC*, el cual contiene diversos archivos de imagen y video en formato JPEG y MP4, de dichas imágenes es posible identificar a un sujeto del sexo masculino con los rasgos fisonómicos del C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, del acceso al Fraccionamiento Puente de Piedra y los daños ocasionados a la barra y puerta de acceso del mismo, así como del vehículo oficial camioneta tipo pick up Ram 700 blanca con placas DX-7237-A.

Destaca por su importancia para el punto en análisis, el archivo de video en formato MP4, mismo que en la parte superior izquierda de la pantalla se aprecia la leyenda "*09-01-2022 jue 04:32:05*" y en la parte inferior derecha "*Portones entrada*", al reproducir el video es posible apreciar un vehículo con las características del vehículo oficial camioneta tipo pick up Ram 700 blanca, el cual al segundo diecinueve de reproducción impacta contra la barra y puerta de acceso en el lugar que según la inspección realizada por la por la Área Investigadora del *OIC*, en fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, corresponde al Fraccionamiento Puente de Piedra de esta Ciudad de Chihuahua, constancias que obran a fojas 19 y 20 del expediente en resolución. (Pruebas 2 y 3)

De lo reseñado en los párrafos precedentes, así como de las pruebas enunciadas, corroborada su idoneidad y pertinencia, permite ubicar en la fecha y lugar de los hechos, el día primero de septiembre del dos mil veintidós, en el Fraccionamiento Puente de Piedra en esta Ciudad de Chihuahua, al C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, teniendo por acreditado que, con su actuar negligente causo daños al patrimonio del Municipio de Chihuahua y al de los colonos del Fraccionamiento

Puente de Piedra en esta Ciudad de Chihuahua, sin mediar excluyente de responsabilidad, causa de justificación, cumplimento de un deber o error manifiesto, violentando con ello los principios de legalidad, uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, que rigen el servicio público.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley General, la cual dispone que las documentales públicas y demás medios de prueba que ofrezcan las partes obtenidos de manera licita, harán prueba plena cuando a juicio de la Autoridad resolutora resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

OCTAVA.- ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN

Una vez que se ha determinado que los hechos imputados por la autoridad investigadora fueron acreditados, lo que corresponde es determinar si es responsable de la comisión de la falta que se le imputa, por lo que se procederá a verificar si los hechos pueden subsumirse a la hipótesis normativa que se considera infringida, lo cual de acuerdo a la autoridad investigadora, es la obligación contenida en el artículo 50 de la Ley General[1].

Para lo anterior y, en aras de cumplir con el principio de tipicidad aplicable al derecho administrativo sancionador[2], se analizará si se actualizan los elementos que integran

---

[1] Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público…

[2] Tesis: P./J. 100/2006 de rubro: TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, con registro digital 174326.

la falta que se imputa en el caso concreto, en los términos que la autoridad investigadora realizó la imputación.

Al respecto, se tiene que los elementos que integran la falta imputada, de acuerdo al contenido del artículo 50 de la Ley General, son los siguientes: a) Que el acto sea cometido por un servidor público; b) Que el acto lo realice con motivo de las funciones, atribuciones o comisiones encomendadas; c) Que en su actuar medie negligencia; d) Que el acto ocasione daño al patrimonio de un ente público.

I. Que el acto sea cometido por un servidor público.

En primer término, se debe determinar si el ciudadano Guillermo Antonio Cabello Rivas tenía, al momento de la realización de los hechos que se le imputan el carácter de servidor público.

Se tiene por acreditado tal elemento típico de la falta imputada con la documental pública consistente en copia certificada del Formato Único para Trámite de Personal de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se establece el alta del C. Guillermo Antonio Cabello Rivas a partir del dieciocho de agosto del dos mil veintidós, como Auxiliar Especializado adscrito al Departamento de Análisis de Legislación de la Subdirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, en relación con el oficio número OM/SRH/0598, signado por el Subdirector de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, medios de convicción que se consideran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para corroborar que a la fecha de los hechos el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas contaba con la calidad de servidor público, siendo en consecuencia sujeto de la Ley General en términos de lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto de la Constitución Federal, 178, párrafo primero de

la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 4, fracción I de la Ley. (Pruebas 1 y 13)

II. **Que el acto lo realice con motivo de las funciones, atribuciones o comisiones encomendadas.**

En su IPRA, la autoridad investigadora señala que la conducta desplegada por el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas fue consumada a bordo del vehículo tipo pick up RAM 700 con placas DX-7237A propiedad del Municipio, mismo que le fue entregado a efecto cumplir con sus funciones.

De la documental pública, consistente en acta circunstanciada de fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la que el C. Luis Iván González Delgado, en su calidad de inspector de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, en la cual manifestó ante la Autoridad Investigadora que atendiendo a las funciones propias de un inspector de la Subdirección de Gobernación le asigno al C. Guillermo Antonio Cabello Rivas el vehículo tipo pick up Ram 700 con placas DX-7237-A en fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintidós, así mismo, del oficio original número SG/1353/2022, signado por el Subdirector de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, se desprende que el vehículo tipo pick up Ram 700 con placas DX-7237-A se encontraba siendo utilizado por el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas en la fecha del siniestro. (Pruebas 11 y 12)

En esta tesitura, partiendo de los hechos que ya fueron acreditados, válidamente se puede afirmar que dichas conductas fueron realizadas a bordo del vehículo asignado para el desempeño de las tareas que al imputado le correspondía realizar en su calidad de servidor público, por lo que el elemento en análisis se tiene por acreditado.

III. Que en su actuar medie negligencia

De acuerdo a los razonamientos hechos por la autoridad investigadora en su IPRA y las pruebas desahogadas en el procedimiento, la conducta atribuida al C. Guillermo Antonio Cabello Rivas fue consumada de manera instantánea al colmar los elementos típicos de la conducta en un mismo acto.

Como ya se analizado en la presente resolución el vocablo *negligencia,* de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, significa "*Descuido, falta de cuidado o falto de aplicación.*", siendo que en el caso que nos ocupa el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, actuó, con falta de cuidado, sin mediar excluyente de responsabilidad, causa de justificación, cumplimento de un deber o error manifiesto, inobservando con ello el respeto a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, los cuales rigen el ejercicio del servicio público.

Los referidos hechos, implican un actuar doloso[3] por parte del presunto responsable, toda vez que actuó con dominio del hecho, sabía y conocía el alcance de dichos actos y sus consecuencias jurídicas, máxime que en su calidad de servidor público esta compelido a conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Lo anterior queda de manifiesto a la luz de las siguientes documentales públicas:

---

[3] *Diccionario de la Real Academia Española*
"Dolo
Del lat. dolus.
1. m. Engaño, fraude, simulación.
2. m. Der. Voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.
3. m. Der. En los actos jurídicos, voluntad maliciosa de engañar a alguien, de causar un daño o de incumplir una obligación contraída..."

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

Denuncia original de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual el C. Carlos Emmanuel Grijalva Acosta remitió evidencia fotográfica y diversas videograbaciones, en relación con el acta circunstanciada de fecha cinco de octubre del dos mil veintidós, de la cual se desprende la copia certificada de un disco magnético de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, suscrita por el C. Fernando Alonso López Castillo, Titular del Área Investigadora del *OIC*, el cual contiene diversos archivos de imagen y video en formato JPEG y MP4, de dichas imágenes es posible identificar a un sujeto del sexo masculino con los rasgos fisonómicos del C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, del acceso al Fraccionamiento Puente de Piedra y los daños ocasionados a la barra y puerta de acceso del mismo, así como del vehículo oficial camioneta tipo pick up Ram 700 blanca con placas DX-7237-A.

Destaca por su importancia para el punto en análisis, el archivo de video en formato MP4, mismo que en la parte superior izquierda de la pantalla se aprecia la leyenda "*09-01-2022 jue 04:32:05*" y en la parte inferior derecha "*Portones entrada*", al reproducir el video es posible apreciar un vehículo con las características del vehículo oficial camioneta tipo pick up Ram 700 blanca, el cual al segundo diecinueve de reproducción impacta contra la barra y puerta de acceso en el lugar que según la inspección realizada por la por la Área Investigadora del *OIC*, en fecha cinco de octubre de dos mil veintidós, corresponde al Fraccionamiento Puente de Piedra de esta Ciudad de Chihuahua, constancias que obran a fojas 19 y 20 del expediente en resolución. (Pruebas 2 y 3)

Por su parte, la documental pública, consistente en acta circunstanciada / entrevista de fecha cinco de abril de dos mil veintitrés, en la que el C. Carlos Emmanuel Grijalva Acosta, en su calidad de presidente del comité de vecinos del fraccionamiento

Puente de Paris, manifestó ante la Autoridad Investigadora que el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas no es residente del fraccionamiento mencionado y que causó un daño al patrimonio de los residentes del fraccionamiento Puente de Paris.

Por lo anteriormente expuesto, se tiene por acreditado que el presunto responsable con su actuar de manera dolosa y negligente ocasiono daños al patrimonio del Municipio de Chihuahua y al de los colonos del Fraccionamiento Puente de Piedra en esta Ciudad de Chihuahua.

IV. Que el acto ocasione daño al patrimonio de un ente público

A efecto de analizar el elemento típico debemos remitirnos a los conceptos plasmados en el apartado denominado marco conceptual y jurídico.

Daño. El artículo 1991 del Código Civil del Estado de Chihuahua, establece que: "*…se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación…*"

Patrimonio. El diccionario de la lengua española de la real academia española lo define de la siguiente manera:

> *"…Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afecto s a un fin, susceptibles de estimación económica…"*

Ente público. Según el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De la **documental pública,** consistente oficio original número SRIA/0431/2023, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, se tiene por acreditado que el resguardo y/o posesión del vehículo tipo pick up DODGE RAM 700 con placas DX-7237-A, correspondía a la Subdirección de Gobernación del Municipio de Chihuahua. (Prueba 4)

En esa guisa, el daño al patrimonio del ente público se tiene por acreditado, atento al contenido de las siguientes documentales públicas:

Denuncia con número de caso 19-2022-0020469, interpuesta por la persona apoderada legal del Municipio de Chihuahua, ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por los daños ocasionados a la camioneta del Municipio de Chihuahua, tipo pick up M700 con placas DX-7237-A.

Presupuesto por parte de la empresa SERVICIO MAELY enderezado y pintura, en atención al Municipio de Chihuahua, en el que se hace referencia a las refacciones y mano de obra requerida para la reparación del vehículo oficial del Municipio marca DODGE RAM-700 modelo 2019.

Entrega de reparación del daño a la víctima de fecha dos de marzo del dos mil veintitrés, signado por el Representante Legal del Municipio de Chihuahua y la Agente de Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, correspondiente al vehículo tipo pick up DODGE RAM 700 con placas DX-7237-A. (Prueba 7, 8 y 9)

Actas circunstanciadas de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés de las que se advierte que el C. José Ricardo Orrantia Mendias, en su calidad de personal especializado adscrito a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua se presentó ante la Autoridad Investigadora a rendir sus manifestaciones en relación al daño ocasionado al vehículo oficial camioneta tipo pick up Ram 700 blanca con placas DX-7237-A y la diversa en la que el C. Luis Carlos Acosta Corral, en su calidad de

personal especializado adscrito a la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, se presentó ante la misma Autoridad a rendir declaración en relación a la reparación del daño ocasionado a los particulares y patrimonio del Municipio de Chihuahua.

De la valoración a los medios de prueba antes referidos se acredita el daño al vehículo tipo pick up Ram 700 con placas DX-7237-A, el cual es un bien mueble propiedad del Municipio de Chihuahua, el cual tuvo como resultado el menoscabo a su patrimonio, con lo cual se tiene por colmado el elemento típico en análisis.

En cuanto al **nexo de causalidad entre falta imputada y la lesión jurídica,** tenemos que la falta que se imputa al presunto responsable tutela el patrimonio de los entes públicos y el correcto actuar de los servidores públicos.

En tales condiciones, al iniciar la marcha del vehículo tipo pick up RAM 700 con placas DX-7237A propiedad del Municipio e impactar contra la pluma de acceso de la caseta ubicada en la cerrada Puente de París en el Fraccionamiento Puente de Piedra en esta Ciudad de Chihuahua, el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas causo daños al patrimonio del Municipio de Chihuahua y al de los colonos del fraccionamiento en mención, sin mediar excluyente de responsabilidad, causa de justificación, cumplimento de un deber o error manifiesto, es por ello que se considera arbitraria, violentando con su actuar el imputado el principio legalidad. En consecuencia, de no haberse desplegado la conducta imputada al sujeto activo no se hubiesen dado tal resultado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el material probatorio reúne las características de pluralidad, pertinencia e interrelación, generan fuerza de convencimiento sobre los hechos imputados por la autoridad investigadora,

atendiendo al desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas, por lo que resulta claro que el presunto responsable contaron con la oportunidad de combatir y controvertir la falta imputada, lo que en la especie no aconteció.

En cuanto al contenido de los hechos narrados y las pruebas reseñadas con antelación, se les dio el valor de indicio en lo individual; no obstante, en su conjunto y al analizarlas a la luz del resto de las constancias que obran en el sumario que se resuelve, forman convicción mediante la integración de la prueba circunstancial.

Al respecto resulta aplicable, *mutatis mutandis* la tesis *CCLXXXIV/2013,* emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004756, cuyo tenor literal es el siguiente:

> ***PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.*** *A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible sostener la responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario existiría una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. Por lo que hace a los indicios, debe señalarse que los mismos deben cumplir con cuatro requisitos: a) deben estar acreditados mediante pruebas directas, esto es, los indicios deben encontrarse corroborados por algún medio de convicción pues, de lo contrario, las inferencias lógicas carecerían de cualquier razonabilidad al sustentarse en hechos falsos. En definitiva, no se pueden construir certezas a partir de simples probabilidades; b) deben ser*

plurales, es decir, la responsabilidad penal no se puede sustentar en indicios aislados; c) deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir, con alguna relación material y directa con el hecho criminal y con el victimario; y d) deben estar interrelacionados entre sí, esto es, los indicios forman un sistema argumentativo, de tal manera que deben converger en una solución, pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la prueba circunstancial en conjunto.

Lo anterior, atendiendo al sistema de libre valoración de la prueba que rige en los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como en las reglas que aplican para los casos de violencia de género, en el sentido de tener por legítimo el uso de la prueba circunstancial siempre que de ella pueda inferirse alguna conclusión considerativa sobre los hechos.

Ahora bien, en aras de cumplir con el principio de exhaustividad que debe regir a las sentencias, es menester destacar que la fuerza probatoria de los diversos medios de convicción, deviene de su concomitancia e interrelación, de no ser así estaríamos frente a indicios aislados que de tomarse en consideración violentarían el principio de presunción de inocencia. Al respecto, resulta aplicable la tesis ya reseñada de rubro: ***PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.***

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte, ha señalado[4] que, la duda razonable puede presentarse al menos en dos situaciones relacionadas con la existencia de pruebas de descargo: (i) cuando éstas confirman la hipótesis de la defensa, de tal manera que ellas acreditan una hipótesis total o parcialmente

[4] Tesis 1a. CCXXI/2015 (10a.), con registro digital 2009467, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SITUACIONES EN LAS QUE LAS PRUEBAS DE DESCARGO PUEDEN DAR LUGAR A UNA DUDA RAZONABLE.**

incompatible con la hipótesis de la acusación; y (ii) cuando a través de esas pruebas se cuestiona la credibilidad de las pruebas de cargo que sustentan la hipótesis de la acusación.

En ese tenor, se da cumplimiento al estándar probatorio de valoración de las pruebas de cargo y de descargo, contenido en la Jurisprudencia de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO[5],** que señala que las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, y cuando la hipótesis de inocencia alegada por la defensa esté corroborada con elementos exculpatorios, por lo que al no actualizarse ninguna de las dos razones expuestas, las pruebas de cargo son suficientes para vencer la presunción de inocencia.

Bajo este contexto, una vez que fueron admitidas, desahogadas y valoradas las pruebas, en conjunto con lo evidenciado del resto de las constancias que obran en autos del expediente, así como de los argumentos vertidos por las partes, es posible para esta autoridad concluir que fue probado más allá de toda duda razonable la realización de los hechos atribuidos a el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, por ende se actualiza la falta administrativa imputada, al haberse acreditado cada uno de los elementos de la misma, la existencia de la relación de causalidad entre la conducta y la lesión jurídica producida, lo que trae consigo el vencimiento de la presunción de inocencia de los servidores públicos, al tenerse un convencimiento de su actuar, en consecuencia, lo conducente es individualizar la sanción que se aplicará.

---

[5] Jurisprudencia número, 1a./J. 2/2017 (10a.), con registro digital 2013368.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

NOVENA.- Individualización de la sanción.

I.Elementos a tomarse en cuenta

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley General, para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 75 de la misma normativa, se deben considerar los elementos siguientes:

1. Cargo desempeñado, nivel jerárquico, antecedentes y antigüedad y en el servicio público. Del oficio signado por el Subdirector de Recursos Humanos, así como de la copia certificada del Formato Único para Trámites de Personal a nombre del C. Guillermo Antonio Cabello Rivas se tiene que en la fecha en que se actualizó la conducta, estos se encontraba adscrito a

Este elemento se valora en perjuicio de los presuntos responsables, toda vez que el puesto que desempeña en el servicio público, implica la calidad de garante de legalidad.

En cuanto a su experiencia, si bien es cierto que el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas fue dado de alta el dieciocho de agosto del dos mil veintidós, como Auxiliar Especializado adscrito al Departamento de Análisis de Legislación de la Subdirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, también lo es que todo servidor público está obligado a conocer los alcances de sus funciones y a ceñirse de forma estricta los principios que rigen su actuar, en ese orden de ideas, la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua y su Reglamento disponen que todo conductor debe contar la licencia para conducir respectiva y para obtenerla, deberá acreditar que cuenta con las aptitudes en la conducción, físicas y mentales,

debiendo conducir con precaución y respeto, máxime quién tiene a su cargo un vehículo institucional.

2. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. De conformidad con las constancias de autos, se advierte que la falta de observancia a los principios que rigen su actuar, trajo como consecuencia el daño al patrimonio del ente público.
Como ya se analizó la conducta desplegada por el presunto responsable resulta evidentemente dolosa, lo cual se valora en su perjuicio, toda vez que las conductas que se les reprochan, descartan cualquier posibilidad sobre la existencia de alguna causa de justificación o cumplimento de un deber y, por el contrario, se considera indeseable su proceder.

3. Reincidencia. De los registros que obran en el OIC, se advierte que la parte señalada como presunto responsable no habían sido sancionados anteriormente por parte del OIC, por lo que no se considera al C. Guillermo Antonio Cabello Rivas como reincidente.

Atendiendo a la circunstancias del hecho y la conducta imputada, resulta necesario analizar lo dispuesto por el último párrafo de artículo 50 de la *Ley General,* del cual se desprende que la Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 75 de la *Ley General*, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado. Siendo que en el caso que nos ocupa, si bien es cierto el Daño ha sido reparado, también lo es que la conducta arbitraria desplegada por el C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, entraña gravedad en sí misma, al causar daños al patrimonio del Municipio de Chihuahua y al de los colonos del Fraccionamiento

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

Puente de Piedra en esta Ciudad de Chihuahua, sin mediar excluyente de responsabilidad, causa de justificación, cumplimento de un deber o error manifiesto, violentando con ello los principios de legalidad, uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, que rigen el servicio público, máxime qué la conducta deseable de un servidor público es la de ser garante de legalidad, actuante de buena fe y respetuoso de los derechos de la colectividad.

Además, si bien es cierto de acuerdo al IPRA y al acuerdo de calificación de la conducta, ésta se tuvo como no grave, para efectos de estar en aptitud de individualizar la sanción que se aplicará de acuerdo al catálogo del artículo 75 de la Ley General, para que la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva, se debe también considerar la gravedad de la conducta *per se,* lo que en la especie acontece, dado que el actuar del C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, no solo implica una infracción de carácter administrativo, sino que trasciende a la materia penal, además, la conducta desplegada por el presunto responsable atenta contra la imagen institucional y de los servidores públicos del Municipio de Chihuahua.

II. Sanción a imponer

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley General, las faltas calificadas como no graves, ameritan las siguientes sanciones:

I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; que podrá ser de uno a treinta días naturales.
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público la que no podrá ser menor de tres meses ni podrá exceder de un año

Además, dicho precepto faculta a los OIC a imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 49, fracción I, 75, fracciones I y II, y 76 de la Ley General y 101 bis, fracción III, numeral 4, del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, en uso de la facultad discrecional otorgada a esta autoridad resolutora para individualizar la sanción administrativa, y habiendo tomado en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la falta cometida se debe imponer a los infractores las sanciones consistentes en amonestación privada y suspensión del empleo por treinta días naturales.

Dicha sanción obedece a la necesidad de suprimir este tipo de conductas que, sin duda alguna, infringen el deber que se impone a los servidores públicos del municipio de Chihuahua de actuar en todo momento apegándose a los principios de respeto a los derechos humanos y legalidad, así como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro.

DÉCIMA. - MEDIDA DE NO REPETICIÓN

Atendiendo a la naturaleza del asunto que se resuelve, el mismo debe entenderse desde el principio de legalidad y correcto ejercicio del servicio público, lo que implica realizar las acciones necesarias contribuir a revertir y eliminar las prácticas que atenten contra ello.

En ese orden de ideas, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General y 101 bis, fracción I, numeral 6 y fracción III, numeral 5, del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, este Órgano Interno de Control del Municipio de

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

Chihuahua hará las gestiones necesarias para el desarrollo e impartición de una capacitación en materia de Código de Ética y responsabilidades administrativas, dirigida al C. Guillermo Antonio Cabello Rivas.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Es existente la infracción objeto del presente PRA y se tiene por acreditada la responsabilidad del C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, al haberse actualizado la falta administrativa contenida en el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme a lo señalado en la consideración octava de la presente resolución.

SEGUNDO. Se impone al C. Guillermo Antonio Cabello Rivas, las sanciones consistentes en amonestación privada y suspensión del empleo por treinta días naturales, las cuales deberán ejecutarse en términos de lo establecido en los artículos 208, fracción XI, 222 y 223 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la persona superior jerárquica del infractor, así como a la Subdirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, a efecto de que sea agregada al expediente personal del infractor.

TERCERO. Se ordena registrar la presente resolución en el Registro de Servidores Públicos Sancionados del OIC.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA032

CUARTO. - Remítase copia certificada de la resolución a la Subdirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor a efecto de que sea agregada al expediente personal del C. Guillermo Antonio Cabello Rivas y que de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, la cumplimente e informe a esta autoridad sobre ello, dentro del plazo de diez días, contados a partir de la notificación de esta sentencia.

QUINTO. - En términos de lo dispuesto por el artículo 208, fracción XI y 222 de la Ley General, remítase copia certificada de la presente resolución a la persona superior jerárquico del infractor y a la Subdirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.

SEXTO. - Gírese oficio al Área Jurídica del OIC, para los efectos de la consideración décima de la presente resolución.

SÉPTIMO. - Cumplimentados los presentes resolutivos; archívese el expediente de cuenta como asunto total y definitivamente concluido, previos los registros correspondientes en el libro de gobierno del Área de Responsabilidades.

OCTAVO. - Notifíquese a las partes en términos de ley.

Así lo resolvió y firma, el Licenciado Esaú Sánchez Pedroza, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, en su calidad de autoridad resolutora.